

Año VI Enero - Junio de 1938 Nos. 23 y 24

Revista de Derecho

SUMARIO

David Stitchkin	Las modernas tendencias del Derecho	Pág. 1837
Dr. Jorge Abásolo S.	Responsabilidad inter - voluntaria o inter - responsabilidad	» 1871
Ramón Domínguez B.	Prescripción de la acción civil que se ha reservado en el Juicio Criminal	» 1889
	MISCELANEA JURIDICA	» 1895
	JURISPRUDENCIA	» 1907
	NOTAS UNIVERSITARIAS	» 1955
	LEYES Y DECRETOS	» 1969

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION (CHILE)

Guillermo Urrea con Amadeo Maurer
COBRO EJECUTIVO DE PESOS
11 de Enero 1938.

Costas — privilegio de pobreza

DOCTRINA.—No habiendo previsto el legislador el caso de que el litigante pobre fue- re condenado en todas las costas de la causa, ni dispuesto que en tal evento el otro co- litigante no declarado pobre de- bería pagar las costas causadas por su parte, no puede soste- nerse que la legislación en ac- tual vigor exima al litigante de- clarado pobre del pago de las costas, si es condenado en ellas.

EL JUZGADO

Lautaro, 11 de Enero de 1938.

Vistos:

Luis Calderón Arriagada, abogado de este domicilio en

representación de Amadeo Maurer, también de este domi- cilio, deduce a fs. 1 demanda ejecutiva en contra de Guiller- mo Urrea, cobrándole la suma de \$ 214.50, que resulta adeu- darle como costas a la que fué condenado Guillermo Urrea en la sentencia confirmatoria de segunda instancia en los au- tos civiles Núms. 3592. Dice que la deuda es líquida y exi- gible y de plazo vencido por cuanto se trata de dinero que emanan de resoluciones judicia- les ejecutoriadas.

José Guillermo Urrea, co- merciante de este domicilio de- duce la excepción del N.º 7.º del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, por fal- tarle al título un requisito para que tenga fuerza ejecutiva ya

Cobro ejecutivo de pesos

1945

que él ha litigado con privilegio de pobreza y el juicio fué perdido. Dice que si ha sido condenado en costas ha sido por la obligación expresa del artículo 715 del Código de Procedimiento Civil.

Al traslado conferido el ejecutante expone que el privilegio de pobreza no tiene otro alcance que el de permitir el uso del papel de menor valor y el ser servido gratuitamente por los funcionarios judiciales. Que existe, además, una sentencia ejecutoriada que ordena pagar las costas.

Habiéndose declarado admisible las excepciones y tratándose de un punto de derecho, se trajeron los autos para dictar sentencia.

Cosiderando:

1.º) Que el ejecutado se ha excepcionado alegando que el privilegio de pobreza lo exime de las costas y que si se le ha condenado a ellas esto se debe a que en los fallos de interdictos posesorios es ineludible el pronunciamiento sobre la condenación expresa a las costas;

2.º) Que es innegable que si la ley ha querido favorecer al

litigante pobre, dándole el privilegio que establecen los artículos 134 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, es lógico aceptar que no puede hacerse efectivo el valor de las costas, ya que la declaración que los jueces sentenciadores hagan condenando en costas en caso que haya un litigante con privilegio de pobreza, debe estimarse como la consecuencia de la obligación legal de hacer dicha declaración;

3.º) Que, por otra parte, la ley no prohíbe que se condene al litigante pobre en costas, pero determina cuando puede terminar dicho beneficio (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), y la forma en que condicionalmente está obligado el beneficiado a pagar los honorarios y derechos causados (artículo 135 del Código de Procedimiento Civil). Y que estos casos especiales, confirman lo establecido en el considerando 2.º ya que ellos se han establecido como excepción para los casos en que el privilegiado mejore de fortuna u obtenga éxito en el juicio;

4.º) Que en el presente caso no se ha acreditado que se haya revocado el privilegio concedido, ni aparece en autos

1946

Revista de Derecho

que el litigante pobre haya obtenido en el juicio;

Con lo dispuesto en los artículos 134, 135, 144, 151, 456, 486, N.º 7.º, 488 y 492 del Código de Procedimiento Civil, se declara que ha lugar a la excepción formulada por el ejecutado José Guillermo Urrea, a fs. 2, y que, en consecuencia, no ha lugar a la demanda de fs. 1, sin costas, por estimarse que ha habido motivos plausibles para litigar.

Anótese.

E. González G.

Dictada por el señor Juez Letrado titular don E. Eduardo González G.— *Eduardo Moscoso*, Sec. suplente.

LA CORTE

Temuco, 2 de Mayo de 1938.

Vistos:

Reproduciendo la parte positiva de la sentencia en alzada, de fecha 11 de Enero pasado, que se registra a fs. 4, y su fundamento 1.º; y

Teniendo, además, presente:

1.º) Que las partes están de acuerdo en que, por sentencia

ejecutoriada dictada en el juicio N.º 3592, seguido entre ellas mismas, sobre querrela de restablecimiento, don José Guillermo Urrea fué condenado en costas; en que éstas fueron tasadas en la suma de \$ 214.50, hallándose aprobada la tasación; y en que en ese juicio el señor Urrea litigó con privilegio de pobreza;

2.º) Que la Ley de Aranceles Judiciales de 21 de Diciembre de 1865, en sus disposiciones generales, contenía diversas articulaciones referentes a los litigantes declarados pobres; y así pueden mencionarse: el artículo 39, que establecía que no se cobrarían derechos "al que hubiere sido declarado pobre para litigar en el juicio de que se trata"; el artículo 40, que contemplaba el caso de que el litigante pobre obtuviera en el juicio y le ordenaba pagar derechos en la forma detallada a continuación; y el artículo 42 que estatuyó que *el litigante no declarado pobre pagaría "las costas causadas por su parte, aunque el co-litigante pobre hubiere sido condenado en todas las costas de la causa"*;

3.º) Que, posteriormente, el Código de Procedimiento Civil

Cobro ejecutivo de pesos

1947

legisló sobre el privilegio de pobreza, estableciendo, en el Título XIII del Libro I, que él debe ser declarado por sentencia judicial, y señalando allí mismo la manera de obtenerlo, los beneficios concedidos al litigante pobre y las obligaciones del mismo. En efecto, el artículo 134 dice: "Los que obtuvieren usarán en sus solitudes y actuaciones el papel sellado de menor valor, y tendrán derecho para ser gratuitamente servidos por los funcionarios del orden judicial y por los abogados procuradores y oficales subalternos designados para prestar servicios a los litigantes pobres"; el artículo 135 preve el caso de que el litigante pobre obtuviera en el juicio y modificando las reglas del artículo 40 de la Ley de Aranceles Judiciales, lo obliga a destinar una décima parte del valor liquidado que resultare a su favor para el pago de los honorarios y derechos causados; y el artículo 144, autoriza para dejar sin efecto el privilegio después de otorgado, siempre que se justifiquen circunstancias que habrían bastado para denegarlo;

4.º) Que, en virtud del artículo final de dicho Código,

que previno que, desde su vigencia "quedarán derogadas todas las leyes preexistentes sobre las materias que en él se tratan, aún en la parte que no fueren contrarias", — es incuestionable que las disposiciones procesales de la Ley de 21 de Diciembre de 1865 relativas a los litigantes pobres fueron derogadas totalmente, y consecuentemente, que el artículo 42, que no fué reproducido por medio de una disposición análoga en el Código de Enjuiciamiento Civil, está también derogado;

5.º) Que, en presencia de esta situación legal y no habiendo previsto el legislador el caso de que el litigante pobre fuere condenado en todas las costas de la causa, ni dispuesto que en tal evento el otro co-litigante no declarado pobre debería pagar las costas causadas por su parte, — no puede sostenerse que la legislación en actual vigor exima al litigante declarado pobre del pago de las costas, si es condenado en ellas; sobre todo, si se tiene en cuenta que el artículo 134 de la ley procesal civil limita los alcances del privilegio a los que taxativamente indica y que entre esos beneficios no están incluidas las costas en que el

1948

Revista de Derecho

litigante pobre sea condenado a favor de su contendor;

6.º) Que, sentadas las anteriores premisas, y siendo el título en que se basa la ejecución una sentencia definitiva firme, que expresamente condenó en las costas de la causa en que fué pronunciada a don José Guillermo Urrea, hay que convenir en que el hecho de haber litigado el ejecutado en esa causa con privilegio de pobreza, no puede significar que el título adolezca de insuficiencia, y consiguientemente, debe desecharse la excepción deducida por el deudor y ordenarse seguir adelante en la ejecución.

Con arreglo a los preceptos citados, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 52 y 1698 del Código Civil; y 456, N.º 1.º, 486, N.º 7.º y 493 del Código de Procedimiento Ci-

vil, se revoca la sentencia apelada, aludida al comienzo y, se declara: que se desecha la excepción opuesta por el ejecutado en su escrito de fs. 2, y que debe seguirse adelante en la ejecución hasta hacerse al acreedor entero pago de su crédito en capital, intereses y costas.

Anótese, publíquese y devuélvanse.

Redactada por el Ministro señor Marín.

Urbano Marín.— M. González Enríquez.— E. Ciudad.

Pronunciada por los señores Ministros propietarios don Urbano Marín y don Manuel González Enríquez y segundo abogado integrante, don Elizardo Ciudad Monsalves.

C. Quilodrán Roa, Sec. interino.